

Santiago, veintidós de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

Por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en la causa RIT O-3248-2023 (a la que se acumuló la RIT O-3254-2023), se acogió la demanda y se declaró injustificado el despido, condenándose a la demandada al pago del recargo legal y las remuneraciones comprendidas entre marzo de 2023 y febrero de 2024 respecto de cada una de las demandantes, más reajustes e intereses, sin costas.

En contra de este fallo la demandada ha deducido recurso de nulidad fundado en la causal consagrada en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su conocimiento en la audiencia del 2 de diciembre último, oportunidad en la que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que el recurso se funda en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, denunciándose contravenidos los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo, 46 de la Ley N° 21.040 y 87 de la Ley N° 19.070.

En cuanto a la vulneración de los dos primeros preceptos reclama la recurrente que se le condenó al recargo legal del 30% no siendo procedente, ya que la causal invocada se encontraría justificada por las Resoluciones Exentas de desvinculación de las demandantes, que se basan en un elemento objetivo que consiste en el Plan Anual que determina la existencia de bajas de matrículas para poder dotar de docentes y asistentes de la educación para el año siguiente, que en este caso dispuso la reestructuración del establecimiento por una baja en las matrículas, cumpliendo además, con los requisitos de la norma en comento y con el aviso de 30 días de anticipación.

Respecto de la infracción del artículo 46 de la Ley N° 21.040 se argumenta en el recurso que la matrícula aplicada para el comparativo que deriva en la baja de matrículas es la correcta y se puede incluir en el Plan



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VVVFXSXEDJ

Anual hasta el 15 de octubre de cada año para ajustar la dotación de docentes para cada año lectivo siguiente.

En relación, por último, con la vulneración del artículo 87 de la Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente, se reprocha que la sanción por el incumplimiento del envío de la carta de aviso en el plazo legal no es aplicable a la institución demandada, sino que únicamente para profesionales de educación particular.

Concluye que la desvinculación de las trabajadoras fue de acuerdo con lo dispuesto en la ley que y los vicios alegados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de haberse aplicado correctamente las normas indicadas la sentenciadora habría rechazado la demanda determinando la improcedencia de la indemnización y del aumento legal reclamados.

Segundo: Que de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En términos simples la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia y ello puede tener lugar, en primer término, en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso. En segundo, en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y por último en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Asimismo, la causal supone por consiguiente que los hechos fijados en el fallo del tribunal a quo resultan inamovibles, de modo tal que los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VVVFXSXEDJ

supuestos de procedencia del recurso deberán referirse única y exclusivamente al derecho aplicable.

Tercero: Que en cuanto a la transgresión de los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo, la esencia del reproche contenido en el recurso radica en atribuirle error al fallo al no haber considerado que las justificaciones expuestas en la carta de despido para explicar las razones en virtud de las cuales se puso término al contrato de trabajo de las actoras, resultan subsumibles en la hipótesis de necesidades de la empresa que se consagra en la primera de las disposiciones citadas.

Sobre el punto la sentencia indica que no existe documental que acredite los supuestos de hecho que den cuenta de los antecedentes económicos que llevaron a la demandada a la adecuación y/o reestructuración de su dotación y que no es suficiente acreditar el término de los servicios que se prestaba sin acompañar antecedentes que permitan revisar en su conjunto todas las operaciones realizadas por la demandada en el periodo que alega y concluir las bajas económicas que la posicionan en la necesidad de racionalizar y reducir dotación. Añade la sentenciadora que en la Resolución Exenta N° 801, de 15 de diciembre de 2022, que aprueba el Plan Anual del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, aparece solo proyección de matrículas para el año 2023, mas no antecedentes que permitan revisar las matrículas de años pretéritos. Tampoco, sigue, se acompañan antecedentes financieros sobre el déficit presupuestario y aquéllos que consideren la necesidad de redistribuir los recursos en contrataciones menos onerosas y prescindir de los servicios de la actora.

Concluye la magistrada que la prueba incorporada al proceso es insuficiente y que no se han acreditado pérdidas o bajas en las matrículas y mucho menos que de existir sean de la gravedad necesaria para poner en peligro la subsistencia del servicio. En consecuencia, finaliza, las pruebas rendidas no reúnen la suficiencia necesaria para acreditar la causal invocada, atendido que no se acreditó detrimento en la situación financiera del Servicio con cierta gravedad y permanencia.

Cuarto: Que, como puede advertirse, el tribunal *a quo* ni siquiera tuvo por acreditada una situación de necesidad que pudiera ser calificada



como tal y, como se dijo, subsumible en la hipótesis del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo. El conflicto planteado por el recurrente en este punto es en rigor uno de calificación jurídica más que de eventual infracción de ley, sin perjuicio que en el caso específico de que se trata lo cierto es que el recurso aparece construido contra los hechos de la causa y que resultan inamovibles en razón de la causal de nulidad invocada.

Por consiguiente, en este aspecto el recurso evidentemente no puede prosperar.

Quinto: Que respecto del segundo yerro, la norma que se alega contravenida es la del artículo 46 de la Ley N° 21.040, y en el texto del recurso se transcribe la letra b) del precepto y luego se afirma que “la matrícula aplicada para el comparativo y de la cual se deriva la baja de matrícula entre un año y otro es la correcta y la física, lógica y legalmente posible para incluirla en el Plan Anual que tiene como fecha máxima el 15 de octubre de cada año, para ajustar la dotación de docentes para el año lectivo inmediatamente siguiente, esto en razón de que la baja de matrícula trae consigo una baja presupuestaria para los Servicios Públicos sostenedores de establecimientos Educacionales Públicos”. Se añade en el recurso que “lo señalado precedentemente se confirma con el hecho que existe un calendario de público conocimiento respecto del Sistema de Admisión Escolar que incluso señala como fecha de matrículas para el año siguiente el mes de agosto de cada año”.

Concluye luego el escrito a la letra que “como se ha visto la desvinculación se apegó estrictamente con lo que dispone la ley por lo que la supuesta falta de fundamentación del artículo 161 del CT es absolutamente falso e inexacto y la aplicación de la sanción dispuesta en el artículo 168 del CT en virtud de las erradas apreciaciones de la norma por parte de la sentenciadora, constituyen una infracción más en este caso de este último artículo del Código del Ramo”.

Ahora, de la lectura del recurso en lo que a la supuesta contravención de esta norma se refiere -y que no es más que lo que se ha transcrito en los dos párrafos anteriores-, no aparece explicada en lo absoluto la forma en que se materializa la infracción de ley que se alega, lo que permite afirmar



que en esta parte el libelo no satisface las exigencias mínimas de admisibilidad y debe ser desestimado.

Sexto: Que, finalmente, cabe referirse a la contravención del artículo 87 de la Ley N° 19.070 que también se denuncia en el recurso.

Este precepto se ubica en el Párrafo III -De la terminación del contrato- del Título V denominado “Del contrato de los profesionales de la educación en el sector particular” y contiene la regla que fue en definitiva aplicada en el fallo impugnada, en circunstancias que en el recurso se alega que la norma no resulta aplicable por cuanto las actoras deben ser consideradas como profesionales del sector público.

Ahora, la parte recurrente plantea que a las demandantes les resulta aplicable el Título VI de la ley, que se denomina “De los establecimientos de educación parvularia financiados con aportes regulares del Estado”, cuyo artículo 88 A señala en el inciso primero precisamente que se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen alguna de las funciones señaladas en el artículo 5° de esta ley en establecimientos que impartan educación parvularia y que sean financiados con aportes regulares del Estado para su operación y funcionamiento. Sin embargo, el inciso tercero del mismo precepto señala que no se aplicarán las reglas del Título a los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos que imparten educación parvularia y que son subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Pues bien, el fallo recurrido afirma que las actoras prestaban servicios en Jardines Infantiles financiados con aportes regulares del Estado mediante ingresos por subvención por alumno matriculado, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, según rezan las Resoluciones N°s 090 y 089, de manera tal que quedan comprendidas en la exclusión del inciso tercero recién citado y se rigen, por consiguiente, por la regla del artículo 87.

En tales condiciones, no ha incurrido en infracción de ley la sentencia cuando aplica el precepto recién citado y concede la indemnización que en él se contempla.



Séptimo: Que por no haberse cometido los errores de derecho que se alegaron en el recurso de nulidad por el demandado Servicio Local de Educación Pública Barrancas, éste habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada contra la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en la causa RIT O-3248-2023 (acumulada RIT O-3254-2023).

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Nº 155-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VVVFXSXEDJ

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E. y los Ministros (as) Suplentes Fernando Antonio Valderrama M., Erika Andrea Villegas P. Santiago, veintidos de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintidos de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VVFXSXEDJ